

El Gobierno cierra Garoña por el rechazo político

CENTRAL NUCLEAR/ El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se anticipa a una renuncia de Nuclenor por razones económicas.

Iñaki de las Heras. Madrid

La central burgalesa de Santa María de Garoña cerrará por decisión ministerial, que no empresarial. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha decidido anticiparse a la previsible decisión del operador de la planta, Nuclenor –participada al 50% por Endesa e Iberdrola–, y ha denegado la solicitud de renovación de la licencia de explotación. Lo hace una semana antes de que venza el plazo legal y evita, de este modo, que Endesa e Iberdrola fueren su clausura con los impuestos y la inviabilidad económica como principales argumentos.

Ayer, Nadal expuso los dos motivos de esta decisión, que es “la que genera menos problema”. El primero, que la central se ha convertido en un escenario de “confrontación política” en el que todos los grupos salvo el PP han promovido una proposición no de ley para su cierre. El segundo, la ausencia de apoyo de Nuclenor a la continuidad. “Uno de los socios rechazó continuar con la operación”, dijo, en alusión velada a Iberdrola.

Pese a la carga política de su decisión, Nadal defendió que “no genera incertidumbre” y que Garoña es un “caso único” que no debe extrapolarse al resto de instalaciones. La que, según dijo, fue la primera central de primera generación de España, afrontaba altos costes de modernización tras el accidente de Fukushima y apenas aporta 466 megavatios (MW), una quinta parte de Almaraz. Además, habrían sido necesarios dos años para recuperar la actividad de la central.

Larga agonía

Nadal también lamentó la falta de “interés” por un debate “sosegado” sobre la central. “Todas las centrales necesitan certidumbre” y Garoña no la tuvo. “Se ha utilizado políticamente y espero que sea el último caso y no haya más *Garoñas*”, subrayó.

Con estas palabras, concluye un largo conflicto político y empresarial, que se inició en



Álvaro Nadal, ministro de Energía.

2009, cuando el Gobierno renovó la autorización hasta 2013. En diciembre de 2012, las empresas retiraron el combustible y paralizaron la actividad como consecuencia de los impuestos a la producción eléctrica aprobados ese año por el Gobierno. Técnicamente, Garoña dejó de producir electricidad el 16 de diciembre de ese año a las 22.57 horas, tras 41 años de actividad.

“Tomaron una decisión por la que fueron sancionadas”, recordó ayer Nadal al anunciar la defunción administrativa de la planta. La multa fue de 18 millones.

Vencimientos pendientes en otras centrales

Tras Garoña, llega el momento de la verdad para las siete centrales nucleares restantes, que suman 7400 MW. El Gobierno deberá dar una respuesta de conjunto a estas instalaciones. Los permisos de Vandellós y Almaraz I y II vencen en 2020 y ya se trabaja en su posible renovación. En 2021, llegará el turno de Cofrentes y Ascó I y II, y en 2024, el de Trillo I.

Pese a detener la actividad, el operador solicitó en 2014 la autorización para la continuidad de la planta, de la que informó favorablemente hace seis meses el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En los últimos semanas, Iberdrola y Endesa se habían mostrado divididas sobre la estrategia de Nuclenor en la fase de presentación de alegaciones al proceso de autorización. Pero sí coincidían en algo: Garoña no es viable económicamente con los actuales impuestos. Desde 2013, se han gastado 358 millones en mantener reversible la planta.

Reacciones

Ayer, tanto Endesa como Iberdrola reaccionaron al anuncio. La primera respeta la decisión y resalta que no es un precedente para el resto de nucleares. La segunda ve “coherente” el anuncio de Nadal, ya que Garoña es “inviable” y su cierre no encarecerá el precio de la luz.

La Junta de Castilla y León, por su parte, anunció un impuesto al combustible nuclear de Garoña para financiar la reconversión del empleo, mientras que en el País Vasco la satisfacción fue unánime entre el Ejecutivo, los partidos de oposición y la delegación del Gobierno.

A nivel nacional, Foro Nuclear lo consideró un “hecho concreto” y los sindicatos pidieron garantías de empleo para los 400 trabajadores de la planta. El cierre definitivo de Garoña requiere ahora un informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del operador del sistema, Red Eléctrica.

Luego, se iniciará el predesmantelamiento de la central. Durará tres años y Nuclenor deberá invertir unos 150 millones de euros, que ya se encuentran provisionados. Posteriormente, la sociedad estatal Enresa asumirá el desmantelamiento, que costará unos 500 millones y que se financia a través de un fondo específico dotado con casi 5.000 millones.

La Llave / Página 2

Gas Natural ultima la venta del 20% de su red de gas

I. de las Heras. Madrid

Gas Natural Fenosa anunciará previsiblemente este mes la venta del 20% de su negocio de distribución de gas, en una operación valorada en cerca de 1.500 millones de euros, que se sumará a otras similares cerradas este año, según fuentes del mercado. El candidato mejor posicionado para la compra es la división de infraestructuras de Allianz, que compite con otras dos ofertas presentadas por el fondo australiano First State y el fondo soberano chino CIC.

De concretarse, la operación supondrá valorar en cerca de 7.500 millones el negocio de distribución de gas de Gas Natural Fenosa, especialmente atractivo desde que, a mediados de 2013, la reforma energética incentivase esta actividad. El importe de la venta no incluye la deuda.

La compañía presidida por Isidro Fainé confirmó ayer en una nota remitida a la CNMV que negocia esta operación “sin que, a la fecha, su consejo de administración haya tomado una decisión de venta”. Bloomberg había informado con anterioridad del interés de Allianz por estos activos.

El cierre está pendiente de la adjudicación final y de la resolución de aspectos técnicos y legales. El propio consejero delegado de la empresa, Rafael Villaseca, ya indicó la semana pasada, en la presentación de resultados a los analistas, que la operación podría concretarse “en breve”.

Los recursos que obtenga Gas Natural Fenosa con esta desinversión podrán utilizarse para el reparto de dividendos,



Isidro Fainé, presidente de Gas Natural Fenosa.

El negocio de distribución sumará operaciones por cerca de 4.500 millones en el año

do, la reducción de deuda, así como para nuevas inversiones. Mientras, para los potenciales inversores, la participación es una fuente recurrente de ingresos.

La red de distribución de la compañía es la más extensa de España e incluye, además, activos internacionales. En total, suma más 142.000 kilómetros de infraestructuras repartidos entre España, Italia y Latinoamérica, que conectan con unos 13,6 millones de puntos de suministro de gas.

La red española consta de 44.000 kilómetros y conecta a 5,2 millones de consumidores.

El negocio de la distribución de gas aportó un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 439 millones de euros a las cuentas del grupo durante el primer semestre del año, un 3,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Tercera del año

De concretarse, esta desinversión será la tercera gran operación en la actividad de distribución de gas en lo que va de año.

EDP anunció esta semana el cierre de la venta de Naturgas a un consorcio formado por Morgan Asset Management, Abu Dhabi Investment Council y Swiss Life Asset Managers por 2.591 millones de euros.

En mayo, Goldman Sachs, por su parte, vendió el 49,9% de Redexis a los fondos de pensiones USS y ATP por 400 millones de euros.

El grupo Neoelectra compra una planta de biomasa en Chile

S. S. Barcelona

Neoelectra da el salto al mercado internacional. La compañía catalana acaba de cerrar la compra de una planta de biomasa en Chile que le permitirá ampliar su potencia instalada y acceder a nuevas oportunidades de inversión en Latinoamérica.

El fondo norteamericano Sandton adquirió en 2015 la unidad productiva de Neoelectra, después de que ésta presentara concurso de acreedores, y abrió una nueva etapa centrada en aportar soluciones energéticas eficientes para

el sector industrial y la recuperación de CO₂ de uso alimentario. El plan estratégico de la firma contempla una inversión de 100 millones en España y Latinoamérica, con Colombia y Chile como principales objetivos.

La planta de cogeneración de energía eléctrica y vapor adquirida ahora pertenecía al grupo maderero Masisa, especializado en tableros y que cotiza en la Bolsa de Santiago de Chile. Neoelectra ha pactado con Masisa seguir suministrándole durante 15 años la energía eléctrica y térmica

necesarias para el proceso de secado de la madera de la fábrica que posee en el municipio de Cabrero, en la región de Bío-Bío. La potencia bruta máxima instalada de la planta es de 11,1 megavatios (MW) y la capacidad de generación de vapor es de 70 toneladas hora.

“Esta compra contribuirá al objetivo estratégico de Neoelectra de disponer de un portfolio de activos de generación diversificados por tecnología y geografía”, destacó ayer el grupo, que suma una potencia instalada de 166 MW repartidos en 24 plantas.